



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD ATLÁNTICO

---

Soledad, dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Sentencia de 2° Instancia

Referencia Clase de acción: TUTELA.  
Demandante: MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON  
Demandado: AECSA Y OTROS.  
Radicado: No. 2022-00018-01.

Procede a pronunciarse el despacho sobre la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la sentencia de fecha dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soledad - Atlántico, declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON.

### **I. ANTECEDENTES.**

El señor MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON, presentó acción de tutela en contra de AECSA y vinculados BANCO DAVIVIENDA, TRANSUNIÓN-CIFIN, EXEPRIAN COLOMBIA SA-DATACREDITO, a fin de que se les amparen sus derechos fundamentales al de PETICION, DEBIDO PROCESO, y HABEAS DATA, elevando las siguientes,

#### **I.I. Pretensiones.**

*“...Se le tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, HABEAS DATA, al BUEN NOMBRE, IGUALDAD, LIBERTAD ECONOMICA y, EDUCACION, en consecuencia, se le ordene a las entidades AECSA, eliminación y/o actualización inmediata de la base de datos de CIFIN SA hoy TRANSUNION y EXPERIAN COLOMBIA SA – DATACREDITO, el reporte negativo que aparece registrada...”.*

#### **V.II. Hechos planteados por el accionante.**

Señala que al momento de hacer los trámites preliminares para un crédito educativo, y hacer consulta a las centrales de riesgo DATACREDITO, el funcionario le informó que tenía varios reportes negativos con AECSA, por lo que no podía seguir adelante, hasta tanto no arreglara esa situación.

Aduce que impetró un derecho de petición a la compañía AECSA, a través de su correo electrónico institucional [atencionalcliente@aecsa.co](mailto:atencionalcliente@aecsa.co), el día 03 de mayo de 2020, solicitando, toda vez, que, de acuerdo con consulta en las centrales de riesgo, me

T-2022-00018-01

encuentro reportado negativamente con referencias No 444833041, No 833769881, No 850001583, No 977844468, la siguiente información, cita textualmente:

*1. Copia simple o evidencia de la autorización previa o expresa otorgada por el Titular de la Información. 2. Copia simple o evidencia de los títulos valores o pagares donde conste la relación comercial de las partes y por ende de la obligación a nombre del reclamante. 3. Copia simple o evidencia de Notificación personal remitida a la suscrita, previa antes del reporte de información negativa, junto con la guía que demuestre el envío de la misma por parte de la Fuente de Información, en el término establecido por el inciso 3 del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en caso de que el reporte se hubiese efectuado con posteridad al 1 de julio de 2009. 4. Copia simple o evidencia de Notificación personal con 30 a 90 días de mora, informando que la deuda pasa a Cobro Pre jurídico. 5. Acreditar la fecha exacta de la exigibilidad de la obligación reportada. 6. Cadena de Cesión o endoso del Crédito a su favor, en caso de que aplique.*

Adicional a ello, solicitó la eliminación y actualización de los reportes, si no contaban con alguno de estos documentos.

Refiere que en oficio consecutivo No 23796 de fecha 18 de mayo de 2020, y recibido en su correo electrónico, responden su petición, anexando copia de la solicitud de crédito y títulos valores con Davivienda, pero no se pronunció con relación a la información solicitada en los ítems 3 y 4, y en el ítem 5, y por tanto la información no fue clara y precisa.

Sostiene que conforme a esta respuesta, el día 20 de octubre de 2020, accionó una petición aclaratoria, en donde explico cada uno de los puntos del oficio de respuesta de AECSA.

*Inciso 3. Atendiendo su solicitud es preciso informar que en virtud de la compra de cartera celebrada entre el BANCO DAVIVIENDA S.A y AECSA, esta última adquirió un portafolio de créditos dentro del cual se encontraban las obligaciones No 3041, No 9881, No 4468, y No 5830 anteriormente adquirida por el señor MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCÓN, C.C. 91.465.927.*

*Inciso 4. Es importante aclarar que la fundamentación legal que tuvo DAVIVIENDA S.A, para poder realizar este tipo de cesiones o ventas de cartera estuvo basada en las normas que regulan dichos actos enunciados en los artículos 1959 del Código Civil y 887 del Código de Comercio.*

*Inciso 5. Igualmente le informamos que en dicho contrato se realizó una subrogación de acreedor, figura jurídica la cual versa sobre la entrega de todos los derechos, obligaciones, y privilegios, que se trasladan del acreedor a un tercero que paga, y facultan a la nueva entidad acreedora para ser efectivo todas las garantías y seguridades. Con las que se haya rodeado al deudor para el cumplimiento de las obligaciones contraídas inicialmente por la entidad bancaria, fundamentación legal que tuvo Davivienda S.A, basada en los artículos 1666 y 1670 del código civil.*

*Inciso 6. Referente al reporte ante las centrales de información financiera sea el momento para precisar que dicho reporte, hace relación al comportamiento de pago presentado por el deudor en atención de las obligaciones en cuestión, las cuales fueron cedidas a AECSA bajo la figura de crédito castigado. Reiterando que la cesión del crédito comprende la información contenida en las centrales de riesgo.*

*Inciso 7. Lo anterior con fundamento en la autorización otorgada por el deudor para hacer uso de la información contenida en la base de datos, con los mismos propósitos del acreedor inicial relacionados con el nacimiento, modificación, extinción, y cumplimiento de las obligaciones, la cual reza: (...)*

En los anteriores incisos, señala que hubo una cesión de crédito, o compra de esta cartera al BANCO DAVIVIENDA S.A por AECSA, especificando el marco normativo y la figura jurídica aplicada a este acto mercantil, pero en lo que concluye en su Inciso 7, hubo

T-2022-00018-01

vaguedad en su premisa, buscando distraer, confundir, e inducir en error al recurrente, pues de acuerdo a lo señalado en el inciso 5, arriba citado, al tenor del Art. 1670 del Código Civil Colombiano que reza en su primer inciso:

*“La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas\* e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda”.*

Afirma que debe existir la copia o evidencia de la notificación personal remitida al titular de la información, previo 20 días antes del reporte de información negativa, junto con la guía que demuestre el envío y recibido de la misma.

Indica que el día 11 de noviembre de 2020, fue Notificado por AECSA, a su correo electrónico con el oficio Consecutivo No 29500 de fecha 11 de noviembre de 2020, dando respuesta a la Petición Aclaratoria interpuesta. Al detallar el texto de respuesta, ratifican lo anteriormente señalado en cuanto a la Cesión celebrada con Davivienda, no solo de Derechos, sino también de la información que reposa en las centrales de Riesgo, por lo que señalan no sufrió alteración o modificación al tratarse de una Subrogación de Acreedor.

Finalmente incorporan a la respuesta, los mismos documentos anexos en el primer consecutivo de respuesta, exceptuando dos nuevos documentos, uno referenciado en el Asunto: Notificación Previa Art. 12 Ley 1266/08, acorde a lo que citaron en el Inciso 2 de la pagina 2 de 4 mencionado arriba, y el otro referenciado en el Asunto: Obligación Pendiente, relacionado con el estado de las obligaciones.

#### **IV. La Sentencia Impugnada.**

El Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soledad - Atlántico, mediante providencia del 2 de noviembre de 2021, declaró improcedente la acción de tutela incoada, al considerar que el accionante no ha agotado el procedimiento establecido para el ejercicio del HABEAS DATA, toda vez que si bien es cierto elevó petición ante la fuente de la información Compañía AECSA, a fin de que las mismas procediera con la eliminación y/o retiro de las centrales de riesgos DATACREDITO EXPERIAN y TRANSUNIO-CIFIN, también es cierto, que la extrema activa, no ha culminado con el agotamiento del requisito de subsidiaridad para la prosperidad de la acción frente al amparo del derecho fundamental al habeas data, pues en la pruebas aportada por el tutelante, no se evidencia la aplicación de las herramientas descritas en líneas anteriores.

#### **V. Impugnación.**

La parte accionante, a través de memorial dirigido a través de correo electrónico presentó escrito de impugnación contra la decisión tomada por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soledad – Atlántico; argumentando no estar de acuerdo con el fallo, teniendo el derecho que le asiste para que la entidad accionada le conceda el derecho al buen nombre, habeas data, debido proceso. Realiza una línea de tiempo de los hechos referente a la acción constitucional presentada y expresa su

T-2022-00018-01

inconformidad con lo resuelto por el a-quo, así mismo indica que La Petición o solicitud de Información inicial, no fue surtida completamente, entre esto, no aportaron la prueba de una Notificación previa al Reporte Negativo, evidenciando también violación al Debido Proceso. En cuanto a la Rectificación o Actualización de datos implícita en esta, no fue contestada, ni resuelta, por lo que no hubo respuesta de fondo.

Afirma que luego, en el segundo consecutivo, que emiten como respuesta a una Reclamación y Aclaratoria Jurídica, mantuvo renuencia a dar respuesta de fondo, aun cuando, sin dar explicación alguna, accede a eliminar el reporte negativo, que han mantenido por más de 10 años, pero lo hacen de manera condicionada, adjuntando a su respuesta una Notificación Previa al Reporte negativo a fecha presente, por fuera del tiempo y oportunidad legal para ello, pues ya se ha configurado la prescripción extintiva de la obligación, la cual, también alegada en la reclamación, han negado, desconociéndole este derecho, con argumentaciones falaces y revaluadas, que buscan distraer, confundir, evadir, inducir en error al peticionario hoy Accionante y a las Autoridades, por lo que considera subyace hoy la vulneración de sus derechos.

Que como respuesta a lo planteado al iniciar el escrito sus derechos, de Petición, Debido Proceso, y Habeas Data, han sido vulnerados por AECOSA, y con ello, a su vez están siendo vulnerados el derecho a la Intimidad, al Buen Nombre, Libre desarrollo de la Personalidad, y Libertad Económica, por lo que es procedente el mecanismo directo o Acción Constitucional de Tutela, por ser el medio más idóneo y efectivo que se puede emplear, contra este particular, ante el manifiesto estado de indefensión, que genera su posición dominante.

Finamente, considera que el Artículo 228 de la Constitución Política Colombiana consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que propende porque las normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos. Ante lo que queda ampliamente evidenciado, es decir, la existencia de una conducta Omisiva y Renuente de parte de esta firma de Cobranzas, que ha lesionado y mantiene amenazado los bienes jurídicos que constituyen el objeto de sus derechos fundamentales, sea la oportunidad en manos de este Tribunal, en impartir justicia y conceder el Amparo de sus derechos deprecados.

#### **VI. Pruebas relevantes allegadas.**

- Derecho de petición del 03 de mayo de 2020.
- Respuesta derecho de petición 18 de mayo de 2020.
- Copia carta dirigida al accionante cesión obligación.
- Reporte habito de pago accionante expedido por Datacrédito.
- Respuestas AECOSA y anexos
- Respuesta Transunion.

T-2022-00018-01

- Respuesta Davivienda.
- Escrito de impugnación y anexos.

## **VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

### **VII.I Competencia**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 1382 de 2000, este despacho resulta competente para conocer de la impugnación del fallo de la acción de tutela en referencia, por resultar ser el superior funcional de la agencia judicial que la profirió.

### **VII.II Problema Jurídico**

- Si es formalmente procedente la acción de tutela en el caso concreto.
- En caso positivo, determinar si la accionada violó derechos fundamentales de la actora, al declarar improcedente la acción constitucional.
- **Requisito de procedibilidad de la acción de tutela para demandar la protección del derecho fundamental al *habeas data***

La Corte Constitucional, siguiendo el lenguaje del numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del derecho fundamental al *habeas data*, que el peticionario haya elevado solicitud a la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él.

En idéntico sentido, la Ley 1266 de 2008 prescribe en su artículo 16 que “*los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador (...) en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida.*”

- **El derecho fundamental al *habeas data*. Jurisprudencia constitucional<sup>1</sup>.**

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desentrañado el lenguaje del artículo 15 de la Constitución Política, contenido del derecho fundamental al *habeas data*, señalando lo siguiente:

*“El *habeas data* confiere, según la norma constitucional citada, un grupo de facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que de sí mismo ha sido recopilada por una central de información. En ese sentido, este derecho fundamental está dirigido a preservar los intereses del titular de la*

---

<sup>1</sup> Sentencia T-164 de 2010

T-2022-00018-01

*información ante el potencial abuso del poder informático, que para el caso particular ejercen las centrales de información financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio.”*

Así, la Corte ha expresado que el *hábeas data* supone un límite a “*la actividad de las entidades administradoras de bases de datos, las regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación, procesamiento, almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales y la reglamentación sobre usuarios de los servicios de las administradoras de las bases de datos*” las cuales, por mandato constitucional, deben regirse “*por los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad*”.

De tal forma, una entidad administradora de un banco de datos desconoce el derecho fundamental al *hábeas data* cuando recopila información “*(i) de manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato, (ii) errónea o (iii) que recaiga sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente.*”

Respecto de la necesidad de contar con la autorización del titular de la información, la Corte, en la sentencia SU-082 de 1995, manifestó lo siguiente:

*“La facultad de reportar a quienes incumplan las obligaciones por ellos contraídas, tiene como base fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el interesado les otorgue para disponer de esa información, pues al fin y al cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar.*

*“Autorización que debe ser expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea realmente eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la información hizo uso efectivo de su derecho. Esto significa que las cláusulas que en este sentido están siendo usadas por las distintas entidades, deben tener una forma y un contenido que le permitan al interesado saber cuáles son las consecuencias de su aceptación”.*

En lo atinente al requisito de veracidad de la información, esta Corporación ha señalado que implica la ineludible obligación de recoger y publicar datos personales que correspondan a situaciones reales, proscribiendo cualquier posibilidad de “*recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca.*” Asimismo, respecto la naturaleza y contenido de los datos recopilados, la Corte ha sido categórica en afirmar que “*la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos.*”

Dichos principios fueron tenidos en cuenta por el legislador estatutario al expedir la Ley 1266 de 2008, “*por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.*” En efecto, el artículo 4° de la normativa en cita dispone, en lo relevante, lo siguiente:

*“En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, los principios que a continuación se establecen:*

T-2022-00018-01

a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto;

d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos;

g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.” (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, en virtud del derecho fundamental al *hábeas data*, es obligación constitucional de las entidades administradoras de bases de datos recopilar y circular datos (i) veraces y oportunos, (ii) relevantes e indispensables para el cumplimiento de los fines del banco de información y (iii) que hayan sido obtenidos con el consentimiento del titular.

- **Límite temporal del dato negativo.**

La Corte Constitucional, consciente de la necesidad de establecer un término luego del cual la información recolectada debía ser eliminada de las bases de datos, señaló, desde sus inicios, en la Sentencia T-414 de 1992, que el dato personal, en razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a “una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de personas virtuales que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales.”

Así, concluyó que “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido.”

A partir de ese razonamiento, este Tribunal desarrolló, ante el déficit de regulación que existía en ese momento, una serie de reglas para determinar la caducidad del dato financiero negativo. En las sentencias SU-082 y SU-089 de 1995, la Corte estableció los términos de conservación del reporte, en cuatro hipótesis:

(i) Cuando el pago había sido voluntario y el tiempo de mora había sido inferior a 1 año, el término de caducidad era el doble de aquel.

T-2022-00018-01

*(ii) Cuando el pago había sido voluntario pero el tiempo de mora ha sido superior a 1 año, el término de caducidad era de 2 años.*

*(iii) Cuando el pago había sido consecuencia de un proceso ejecutivo, el término de caducidad era de 5 años.*

*(iii) Cuando el pago había sido efectuado con la notificación del mandamiento de pago, el término de caducidad era el mismo que en la hipótesis de pago voluntario.*

Posteriormente, esta Corporación, advirtiendo que las anteriores reglas no eran aplicables a aquellas hipótesis en las cuales no hubiera pago efectivo de la obligación, manifestó que *“ante el vacío mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al razonamiento analógico; que enseña que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en este caso, la regla general de la prescripción de la acción ordinaria civil y debe señalar que el término de almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez (10) años; término similar al establecido por el Código Civil para la prescripción de la acción ordinaria.”*

Para este Tribunal, la aplicación analógica del término general de prescripción de las obligaciones civiles tenía su fundamento en que *“sólo durante el término prudencial para hacer uso de las vías judiciales se justifica el ejercicio del control social que eventualmente un particular ejerce respecto de otro, lo cual se asimila a una forma de “justicia privada” (...) Cuando ya no es posible obtener el cumplimiento de una obligación jurídica por las vías institucionales tampoco es admisible que el ordenamiento jurídico ampare la vigencia de una sanción moral – muerte civil como la denomina el accionante – con incidencia indefinida sobre la imagen y honra de una persona.”*

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de ese momento, el término de caducidad del dato financiero negativo cuando la obligación no se satisfacía era de 10 años, contados a partir del término de exigibilidad de la obligación que originaba el reporte.

Más recientemente y respondiendo a los múltiples exhortos que la Corte le había formulado al legislador a través de las decisiones de tutela para que expidiera una ley que regulara lo relacionado con el *hábeas data*, el Congreso de la República sometió a control previo de constitucionalidad, siguiendo el mandato contenido en el artículo 241 de la Carta Política, el proyecto de ley No. 27 (Senado) - 221 (Cámara), que más adelante se convertiría en la Ley 1266 de 2008.

Dicho proyecto, en su artículo 13, relativo a la permanencia de la información de los bancos de datos, establecía lo siguiente:

*“La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información.*

*Los datos cuyo contenido hagan referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se registrarán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan*

T-2022-00018-01

*acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.”*

En su análisis de control de constitucionalidad, la Corte observó que el artículo 13, al igual que su propia jurisprudencia en algún momento, dejaba sin regular la caducidad del dato financiero negativo cuando la obligación permanecía insoluta. Así, respecto de la posibilidad de que el reporte negativo por obligaciones insatisfechas permaneciera de manera perenne, la Corte señaló lo siguiente:

*“(…) la norma analizada impone consecuencias jurídicas irrazonables respecto del sujeto concernido en dos supuestos concretos. El primero de ellos tiene que ver con los titulares de información basada en obligaciones insolutas cuya exigibilidad supera el término de la prescripción ordinaria. Para este caso, la disposición no prevé un plazo de permanencia, puesto que supedita la contabilización de la caducidad a partir del pago de la obligación. Así, como en este caso no se había verificado ese pago, la información financiera permanecerá de modo indefinido. En este evento, la Sala advierte que, conforme a la doctrina expuesta, resulta totalmente injustificado que se mantengan en las bases de datos reportes basados en obligaciones que han sido excluidas del tráfico jurídico, amén de la imposibilidad de ser exigibles judicialmente. Si el ordenamiento legal vigente ha establecido que luego de transcurridos diez años opera la extinción de las obligaciones dinerarias, no existe razón que sustente que a pesar que ha operado este fenómeno, el reporte financiero que tiene origen en la deuda absoluta subsista. Por ende, la permanencia del dato más allá del término de prescripción configura un ejercicio abusivo del poder informático, que en el caso concreto se abrogaría una potestad más amplia que la del Estado para derivar consecuencias jurídicas de la falta de pago de obligaciones.”*

*“Según lo expresado, la medida adoptada por el legislador estatutario faculta a los operadores de información para mantener datos financieros negativos, derivados de obligaciones insolutas, de forma indefinida. Esa posibilidad impone una carga desproporcionada al sujeto concernido, puesto que el juicio de desvalor generado por el reporte negativo tendría consecuencias en el tiempo más amplias que las que el ordenamiento jurídico ha dispuesto como predicables de las obligaciones dinerarias. Conforme lo anterior, mientras que para el Derecho la obligación no resulta exigible, puesto que se considera extinta en razón del paso del tiempo; esta mantiene sus efectos restrictivos para el acceso al mercado comercial y de crédito y, en consecuencia, el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en tanto permanece en los bancos de datos indefinidamente.”*

Considerando constitucionalmente inadmisibles que el reporte de información financiera negativa permaneciera de forma *ad aeternum* en las hipótesis en las cuales la obligación permanecía insoluta por un período superior al término de prescripción, esta Corporación declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 13 en los siguientes términos:

*“Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 del Proyecto de Ley objeto de revisión, en el entendido que la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que el término de permanencia de cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier modo.”*

T-2022-00018-01

Con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, esta Corporación tuvo una primera oportunidad de aplicar el nuevo régimen de caducidad del dato financiero consagrado en el artículo 13 de la ahora Ley 1266 de 2008 a una situación particular. En la sentencia T-421 de 2009, la Corte estudió el caso de una persona que, producto del incumplimiento de sus obligaciones, había sido reportada negativamente ante las centrales de riesgo en el año 1998. El peticionario aseguraba que, debido a que el término de prescripción de dichas obligaciones ya había transcurrido, el reporte negativo debía ser eliminado.

Este Tribunal, siguiendo lo dispuesto en la Sentencia C-1011 de 2008 antes relatada, consideró que *“la caducidad del dato financiero negativo, ante la extinción de la obligación por cualquier modo, no puede exceder cuatro años, contados a partir del momento en el que la obligación se extinga, esto es, desde el momento en el que deje de ser exigible judicialmente.”*

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, el término de caducidad del dato financiero negativo, tratándose de la extinción de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la prescripción liberatoria), es de cuatro años, contados a partir del momento de ocurrencia del fenómeno extintivo.

En consecuencia, no se vulnera el derecho fundamental al *hábeas data* cuando una entidad se abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre una persona por el incumplimiento de una obligación civil que permanece insoluta, respecto de la cual ha transcurrido un término menor de 10 años desde la fecha de su exigibilidad.

La ley civil establece que la prescripción de la acción ordinaria (el mecanismo procesal que le permite a un acreedor obtener una declaración judicial respecto de la existencia de una obligación) ocurre en el término de 10 años, contado a partir de su exigibilidad. Así, no es posible entender que una obligación se extinga en periodo inferior a aquel y mucho menos, que el término de caducidad del dato financiero negativo se complete antes de dicho periodo. Por el contrario, el límite temporal de dicha información, tratándose de aquellas hipótesis en las cuales el deudor nunca paga, se extiende – a manera de sanción – por un período de 4 años contado a partir del momento en que la obligación prescribe.

La Corte consideró que si bien el juez de tutela carece de la facultad de decretar la prescripción de una obligación, ya que dicha prerrogativa corresponde a los jueces civiles, no necesita de una efectiva declaración judicial de prescripción para poder proteger el derecho fundamental al *hábeas data*.

En efecto, aunque resulta innegable que el cómputo del término de caducidad del dato financiero negativo cuando no hay pago de la obligación depende necesariamente de la verificación del fenómeno que dio lugar a su extinción, es deber del juez de tutela, en aras de garantizar la protección efectiva a dicho derecho, emplear todas las facultades probatorias con las que dispone para determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación incumplida objeto del reporte negativo, y desde ahí (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo señalado por la ley para la extinción de la obligación por el fenómeno de la prescripción liberatoria.

T-2022-00018-01

Así, luego de encontrar que dicho término haya efectivamente transcurrido, deberá verificar que hayan pasado más de 4 años desde aquel momento, para poder conceder la protección al derecho al *hábeas data* a deudores que se hayan sustraído de manera permanente de sus obligaciones crediticias. En consecuencia, una entidad vulnera el derecho fundamental al *hábeas data* de una persona cuando mantiene un reporte negativo de ella por un término superior a 4 años, contado a partir del momento de extinción de la obligación por prescripción liberatoria. No sobra advertir que la verificación de la caducidad del dato financiero no implica, de ninguna manera, declaratoria judicial alguna sobre la prescripción de la obligación.

## **VIII. Del Caso Concreto.**

### **IX.I. Cumplimiento del Requisito de Procedibilidad.**

En el presente caso de acuerdo con las manifestaciones hechas en libelo de tutela se tiene, que el accionante MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON presentó acción de tutela contra AECSA y vinculados DATA CREDITO – CIFIN – y BANCO DAVIVIENDA, a fin de que se le amparen su derecho fundamental al derecho Buen nombre, debido proceso y Habeas Data.

En cumplimiento del deber de regular el derecho fundamental al *habeas data* el Legislador expidió la Ley Estatutaria 1266 de 2008<sup>2</sup> la cual reiteró los principios fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Puntualmente, la ley en mención estableció que las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos personales contenidos en bases de datos de carácter financiero deben regirse por los principios de veracidad, temporalidad, integridad, seguridad, confidencialidad, circulación restringida y finalidad<sup>3</sup>.

Con respecto al requisito de procedibilidad para demandar la protección del derecho fundamental al *hábeas data*, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que para resolver los conflictos relacionados con el recaudo, administración y uso de la información personal, se debe hacer uso de las herramientas contempladas en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en el numeral 6 del artículo 16, prevé que se pueda ejercer la acción de tutela para solicitar el amparo del derecho fundamental al *habeas data*; norma que guarda relación con lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acción de tutela contra particulares procede, cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del *hábeas data*, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

Teniendo con consideración lo expuesto, a partir del contenido normativo de las disposiciones referidas, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha señalado que, en aquellos casos en los que se discute el derecho fundamental al *habeas data*, es presupuesto fundamental para el ejercicio de la acción de tutela que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, de manera previa a la interposición del mecanismo de amparo constitucional.

---

<sup>2</sup> “Por la cual se dictan las disposiciones generales del *hábeas data* y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.

<sup>3</sup>Cfr. Sentencia T-139 de 2017.

T-2022-00018-01

Teniendo con consideración lo expuesto, a partir del contenido normativo de las disposiciones referidas, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en la Sentencia T-727 de 2002, T-131 de 1998, T-857 de 1999, T-467 de 2007, y T-284 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, han señalado que en aquellos casos en los que se discute el derecho fundamental al habeas data, es presupuesto fundamental para el ejercicio de la acción de tutela que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, de manera previa a la interposición del mecanismo de amparo constitucional.

En tal virtud, al acreditarse al interior de la tutela el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela para lograr el amparo del derecho al habeas data, consistente en la reclamación previa de modificación, aclaración o rectificación de la información ante el operador de la base de datos o ante la entidad fuente de la misma, resulta procedente el ejercicio de la presente acción, pues obra en el plenario petición dirigida a las entidades AECSA – DAVIVIENDA mediante el cual se solicita corrección, actualización y eliminación del reporte negativo ante las centrales de riesgo por parte del actor, con su respuesta, por lo que no le asiste razón al Juez de Primera instancia en declarar su improcedencia al omitir dicha solicitud.

Ahora en lo referente al reporte negativo, de acuerdo a la respuesta brindada por TRANSUNION, y AECSA, el accionante se encuentra en mora por **saldo insoluto** de las obligaciones contraídas con el Banco Davivienda, entidad financiera que a través de la subrogación realiza la venta de cartera a la entidad accionada AECSA, adquiriendo dicho portafolio de créditos entre estos los del accionante MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON.

De acuerdo a lo establecido por la Corte, cuando indica que tratándose de aquellas obligaciones en las cuales el deudor nunca paga, se extiende – a manera de sanción – por un período de 4 años contado a partir del momento en que la obligación prescribe, pues para el caso presente, según las pruebas allegadas las fechas de vencimiento de las obligaciones son el 31/01/2013, 31/03/2017, 26/02/2016, es decir, que a partir de esas fecha se debe contabilizar el término de diez años, fecha en que opera la prescripción y a manera de sanción por ser una obligación con saldo insoluto, a partir de dicha declaratoria de prescripción se adicionarían cuatro años más, es decir para un total de catorce años de permanencia con el reporte negativo, dichas así las cosas, aun a la fecha no se encuentra vencido el término de prescripción ni de caducidad.

En consecuencia, no hay lugar en el caso concreto a conceder la protección solicitada al derecho al HABEAS DATA en los términos que solicita el tutelante, y en tal medida se revocará la sentencia de primera instancia que la declaró improcedente y en su lugar se negará la acción constitucional.

Atendiendo a las motivaciones precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

T-2022-00018-01

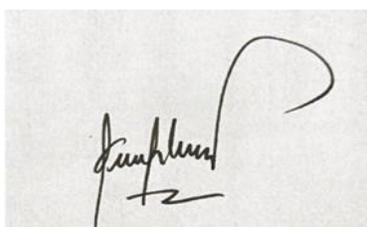
**PRIMERO:** REVOCAR la sentencia de tutela fecha dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferido por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soledad - Atlántico, por lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar:

*NEGAR la solicitud de amparo Constitucional, solicitada por el señor MIGUEL ANGEL BUENAHORA RINCON, contra la entidad AECSA y las vinculadas BANCO DAVIVIENDA, TRANSUNION Y DATACREDITO, por las razones expuestas en la parte considerativa.*

**TERCERO:** Notifíquese esta sentencia a las partes intervinientes, al Juez de Primera Instancia y al Defensor del Pueblo, en la forma más expedita posible.

**CUARTO:** Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**GERMAN RODRIGUEZ PACHECO**

**Juez**

**Firmado Por:**

**German Emilio Rodriguez Pacheco**

**Juez**

**Juzgado De Circuito**

**Civil 001**

**Soledad - Atlantico**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 937f5a564c7ac1c8f4f5247e7d1b7e59b2e6d4dd35435acad2851c87edb485dc

Documento generado en 22/02/2022 08:11:16 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**